

tos de trabajador rural. Los jornaleros que trabajan en plantaciones, como los que se dedican al cultivo de la caña de azúcar en Perú o al de las bananas en América Central, deben considerarse más bien como una especie de proletariado rural que trabaja a cambio de un salario. Estos jornaleros agrícolas forman con frecuencia sindicatos de naturaleza y funciones similares a las de los trabajadores urbanos mientras que los campesinos —que practican en su mayor parte una agricultura de subsistencia, y algunas veces cultivan productos comerciales en tierras propias— tienden a organizarse sobre una base local y, en caso de estar políticamente movilizados, suelen unirse a un movimiento de masas y participar en acciones directas en lugar de en negociaciones colectivas. En general, apenas mantienen contactos con la mano de obra urbana, incluso en países con un movimiento sindical avanzado, como por ejemplo Chile. Sus objetivos son diferentes, y muchas veces sus formas de trabajar y organizarse tienen apenas nada en común con las de los trabajadores urbanos. En ocasiones pueden unirse a través de una asociación común con un partido político; pero, dadas las limitaciones impuestas a las actividades de los partidos, eso resulta cada vez más raro. La alianza entre obreros y campesinos puede ser teóricamente necesaria para llevar a cabo la revolución o incluso para fundar un partido político mayoritario, pero en la mayoría de los países de América Latina parece estar muy lejana la posibilidad de esa alianza.

Diferencias entre países

La idea general que se deriva de todo lo anteriormente expuesto es la de la existencia de una marcada diferenciación entre los diversos grupos que componen la clase obrera de América Latina. Pero nos mostraríamos superficiales y propiciaríamos el equívoco si no pusiésemos de relieve que existen también grandes diferencias entre unos países y otros. Argentina, por ejemplo, cuenta con una estructura ocupacional tan moderna como la de muchos países europeos, con una elevada proporción de su mano de obra en empresas grandes y modernas, y una proporción mucho más pequeña dedicada a la agricultura. Aunque tras el golpe de 1976 han padecido una dura represión gubernamental, los sindicatos argentinos son organizaciones muy fuertes, ricas, burocratizadas y que abarcan a varios grupos de industrias, lo que los hace bastante parecidos a los sindicatos europeos. Chile es un caso excepcional, no por las dimensiones o fuerza de su movimiento sindical, sino por su grado de compromiso político radical, compromiso sorpren-

dentemente vivo todavía a pesar de los denonados esfuerzos gubernamentales por reprimirlo a partir de 1973. Ese compromiso radical es el resultado de un largo período de desarrollo de la izquierda, en el que las actividades de los partidos y los sindicatos se vieron estrechamente ligadas entre sí.

Aunque cualquier generalización debería ir rodeada de toda una serie de matizaciones, se pueden extraer las conclusiones que exponemos a continuación. (Si bien los sindicatos cubanos se parecen a otros de América Latina en su dependencia del Estado, en los demás sentidos difieren tanto que no los hemos tomado en consideración).

Argentina es el único país en el que la mayoría de los trabajadores urbanos está organizada en sindicatos independientes y que abarcan varios sectores industriales, con una poderosa burocracia acostumbrada a negociaciones colectivas a escala nacional. A partir de 1976 el movimiento sindical ha sufrido graves restricciones y limitaciones, pero incluso entonces resultaba demasiado poderoso para que se le pudiera reprimir a como durante algún tiempo se reprimió a los de Brasil, Uruguay o Chile.

Manifestación del movimiento Unidad Popular en Chile, 1972.



La mayoría de los restantes países cuenta con un determinado número de organizaciones sindicales poderosas, pero que han logrado afiliarse sólo a un sector pequeño y con frecuencia privilegiado de la mano de obra, pudiendo mostrarse bastante alejadas de la política general de la mano de obra (aunque eso no quiere decir que vayan por detrás; pues, de hecho, pueden ir por delante). Por la propia naturaleza de su ocupación, los trabajadores del petróleo o los mineros se encuentran frecuentemente aislados de los grandes centros urbanos. En Bolivia los mineros del estaño han desempeñado un destacado papel en la política del país; pero su grado de militancia no puede considerarse representativo del de la mano de obra boliviana, y las simpatías mostradas por estos mineros hacia las ideas trotskistas tampoco pueden considerarse un fenómeno generalizado.

En México y Brasil, el desarrollo económico ha dado recientemente lugar a la aparición de sindicatos grandes y poderosos, sobre todo en la industria automovilística; pero, al menos hasta muy recientemente, la estructura del sindicalismo era impuesta en estos países por el gobierno, y controlada por él, aunque no siempre fácilmente, con períodos en los que los sindicatos amenazaban con liberarse del yugo del gobierno.

Generalmente, los sindicatos latinoamericanos son pequeños, débiles, pobres y se ven coartados por toda una serie de regulaciones (jurídicas y políticas) impuestas por los gobiernos y destinadas a frenar el desarrollo de un movimiento sindical libre e independiente. El agente negociador es el pequeño sindicato de fábrica, que se dedica la mayor parte del tiempo a una dura lucha destinada a evitar que los salarios reales descendieran incluso por debajo de la tasa de inflación. No obstante, la mayoría de los obreros trabaja en empresas demasiado pequeñas como para contar siquiera con un sindicato, y no se encuentra protegida por las garantías mínimas que podría proporcionarle un activo sindicato de fábrica. En consecuencia, las relaciones laborales dentro de numerosas factorías y empresas adoptan con frecuencia un carácter paternalista y, en caso de existir, el sindicato apenas puede hacer nada. Los sindicatos se esfuerzan por mantener la estabilidad en el empleo, que en algunos países es incluso mayor que en Europa. No obstante, a los empresarios les interesa la libertad de despido, que se da con frecuencia en aquellos sectores en los que los sindicatos son más débiles.

Una excepción general a todo lo anteriormente expuesto es la de los empleados o funcionarios del Estado. En América Latina el Estado es muchas veces una importante fuente de empleos, y, aunque en la mayoría de los países se prohíbe a los trabajadores o funcionarios del Estado que creen

sindicatos, esta prohibición se ignora muchas veces en la práctica. Los empleados o funcionarios del Estado cuentan también con la ventaja de estar organizados en grandes números y tener enfrente a un solo empresario, el gobierno, que en teoría tiene capacidad para modificar las tasas salariales. Los empleados o funcionarios del Estado han demostrado ser uno de los grupos más militantes de toda América Latina. En unos cuantos países los maestros de escuela se han opuesto con frecuencia a la política gubernamental de manera decidida e incluso violenta.

Sindicatos, política y Estado

Los gobiernos de América Latina han mostrado en prácticamente todos los momentos una decidida intención de combatir los intereses de la clase obrera. De ahí que la mayoría de los países cuente con legislaciones laborales elaboradas y complejas, frecuentemente promulgadas antes de que la mano de obra organizada represente una amenaza política en cualquier sentido. A medida que la mano de obra se ha ido convirtiendo en una amenaza política, el Estado ha ido intensificando sus intentos por controlar o sojuzgar los movimientos sindicales.

La legislación laboral regula casi todos los aspectos de la actividad sindical, desde la negociación colectiva hasta la forma de elegir a los líderes. Y, cuando ha existido un conflicto legal, los poderes judiciales de América Latina han demostrado ser más partidarios del gobierno que de los trabajadores. Pero, aparte de controlar las actividades de la mano de obra, algunos gobiernos han incluso fijado la estructura de la organización de los sindicatos, intentando sobre todo impedir la aparición de una única organización sindical nacional. Por ejemplo, el código laboral brasileño, con el ministro de Trabajo como máxima autoridad, especifica un sistema sumamente preciso de confederaciones federaciones, y sindicatos locales. Prácticamente todos los códigos laborales establecen la diferencia entre los trabajadores de «cuello blanco» y «mono azul».

Aparte de esos intentos descarados de regular la mano de obra, los gobiernos no vacilan en emplear otros métodos. El más conocido es el de la represión, y desgraciadamente abundan los casos de dirigentes sindicales retirados de sus cargos, deportados o incluso asesinados en aras de la «seguridad nacional». No obstante, cabe preguntarse si éste es un método de control tan eficaz como la elección de dirigentes sindicales mediante un sistema basado en el paternalismo y la corrupción, y de los propios sindicalistas mediante un sistema generalizado de planes gubernamen-

tales de seguridad social. Durante muchos años, la mano de obra mexicana fue liderada por hombres comprados por el gobierno y famosos por su corrupción (aunque esto no quiere decir que fueran ineficaces como dirigentes sindicales, sobre todo cuando se enfrentaban con un empresario que no gozaba de los favores del gobierno). La mano de obra puede cooperar con gobiernos progresistas o bienintencionados, como lo hizo con el del presidente Cárdenas en el México de finales de la década de los treinta. Pero en realidad este tipo de gobiernos progresistas es más bien raro en América Latina.

Lo que se pretendía con una regulación tan estricta de los sindicatos era apartar a la mano de obra de la política y controlar sus operaciones. Sin embargo, las consecuencias han sido exactamente las contrarias. Dado que los gobiernos regulan tan estrictamente temas cruciales para los sindicatos (siendo un ejemplo claro el de la política de rentas o ingresos), las organizaciones sindicales deben enfrentarse o intentar influir en los gobiernos si desean alcanzar cualquiera de sus objetivos básicos. Como las regulaciones han debilitado a los sindicatos, en sus intentos por influir sobre la política gubernamental se ven obligados a buscar aliados políticos. De ese modo, en la mayoría de los países latinoamericanos los sindicatos están estrechamente relacionados con uno u otro partido político —socialistas, comunistas, o cristiano-demócratas en Chile; los trabajadores peruanos del azúcar están estrechamente relacionados con el

APRA, y los maestros peruanos de escuela con la izquierda maoísta; los sindicatos campesinos venezolanos mantienen estrechos lazos con AD (Acción Democrática); el movimiento laboral mexicano, con el PRI (Partido Revolucionario Institucional), etcétera—. Como siempre, la excepción más importante la constituye Argentina, donde un movimiento político, el Peronismo, estuvo dominado por el poder de los sindicatos, especialmente a partir de 1955.

Esta estrecha relación con los partidos políticos tiene ventajas e inconvenientes. La conexión con un partido puede contribuir a unificar grupos de trabajadores de sectores distintos; también puede servir para dotar a intereses difusos de una estrategia coherente, ayudar y defender a la mano de obra en situaciones de crisis y servir como fuente de fondos y asesoría legal. Pero hay también inconvenientes. Dado que más de un partido compite por el apoyo de la mano de obra, existe el peligro de sectarismo y del sometimiento de los intereses de los sindicatos a los del partido (siendo probablemente el ejemplo más conocido el del APRA en Perú). Cuando un movimiento sindical débil necesita un impulso hacia la unidad, las diferencias políticas pueden representar un factor de división más. Y cuando se prohíben los partidos políticos, los movimientos sindicales relacionados con ellos se ven igualmente afectados. No obstante, el modelo norteamericano de sindicalismo apolítico resulta totalmente inaplicable en América Latina. Es probable que incluso las expresiones más básicas de actividad sindical sean consideradas por el gobierno como «políticas»; y cualquier intento de acción colectiva en nombre del bienestar de los pobres tiene también grandes probabilidades de verse etiquetado de «subversivo».

Deberíamos mencionar una problemática adicional (aunque resultaría demasiado complejo explorar todas sus ramificaciones), la de las actividades de los organismos internacionales. A través de ellos se ejercen influencias, sobre todo norteamericanas —que pueden ser directas, a través de la participación de la ORIT (Organización Regional Interamericana de Trabajo), o indirectas, a través de instituciones de formación o educación con base en Estados Unidos, tal como el AFLD (American Institute for Free Labour Development), o más clandestinamente a través de la CIA—. Estos grupos invierten en América Latina grandes sumas de dinero; canalizadas a través de la CLAT (Confederación Latinoamericana de Trabajadores), diversos grupos cristianos invierten cantidades inferiores, pero también considerables. Una cuestión completamente distinta es la de la eficacia de este tipo de inversiones. No se debería infravalorar la capacidad de los movimientos sindicales lo-

cales para manipular a sus socios mucho más ricos. Pero por lo general esas actividades representan una intrusión en la política local y favorecen la división.

Conclusión

Durante los años sesenta y setenta, las reivindicaciones populares, que implicaban pero no se limitaban exclusivamente a los sindicatos, llegaron a dominar la política de muchos países latinoamericanos. En su intento por frenar esas reivindicaciones, y concretamente en Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia y Perú, el Estado recurrió a medidas más drásticas de represión y control bajo la guía de regímenes totalitarios. De hecho, las clases dominantes de algunos de esos países han visto tan clara la amenaza, que han realizado un intento deliberado por reestructurar la economía de tal manera que la clase obrera tenga menos probabilidades de plantear un reto o desafío en el futuro. La política monetarista seguida en Chile, reduciendo las dimensiones del sector manufacturero, contribuye evidentemente a debilitar a los sindicatos.

No obstante, el mayor obstáculo para la consolidación de esos regímenes totalitarios sigue siendo el movimiento laboral. En Brasil, tras diez años de paz laboral, se produjeron en 1978 impresionantes huelgas masivas. El triunfo de la huelga general en Perú aceleró la decisión de los militares de devolver el gobierno a los civiles. Ni tan siquiera la represión desencadenada en Chile por el general Pinochet ha bastado para destruir la tradición política del movimiento sindical, ayudado en gran medida por la Iglesia.

Como sector más organizado de la mayoría de los pobres de la ciudad y del campo, los sindicatos se han visto obligados a propugnar y defender sus intereses. Los sindicatos se han salido de sus funciones específicas debido a que el sistema dominante ha hecho que resulte extremadamente difícil cumplirlas con un mínimo grado de efectividad. En consecuencia, los sindicatos parecen ofrecer el modelo social y económico alternativo que supere las diferencias en el seno de la clase obrera.

En este artículo hemos puesto el acento en las estrechas relaciones existentes entre el movimiento sindical y el sistema político y económico nacional. Las estadísticas sobre número de miembros, densidad de las organizaciones sindicales, etc., resultan con frecuencia inexactas y equívocas, y no nos dicen prácticamente nada acerca del carácter y papel de los sindicatos. Los destinos de los movimientos sindicales latinoamericanos están inextricablemente ligados a los de sus respectivos sistemas políticos nacionales y, aun-

que los sindicatos han cambiado en muchos sentidos durante el presente siglo, esa relación tan particular se ha seguido manteniendo.

AEA

Insurrección y terrorismo

Veinte años separan a los dos movimientos insurgentes que han logrado triunfar en América Latina: Cuba en 1959 y Nicaragua en 1979. Resulta difícil remontarse a un momento en el que la rebeldía latinoamericana no estuviera dominada por la figura de Fidel Castro y las ideas que cristalizaron en torno a la campaña de guerrillas rurales que en 1959 arrebató el poder a la corrupta dictadura que imperaba en Cuba. Sin embargo, la propia independencia de América del Sur le debió mucho a las guerrillas, y a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX se libraron campañas guerrilleras en México, Cuba, Brasil y Nicaragua. Junto a esos movimientos insurgentes, los militares han desempeñado con frecuencia el papel dominante en la política, cuya evolución se ha visto acentuada por cambios violentos en el poder y estallidos de violencia civil. El banditaje rural y la delincuencia urbana fueron fenómenos endémicos. El terror, empleado más como táctica para intimidar que para adueñarse del poder, estaba tan integrado en la vida cotidiana como hoy en día.

Tras la Revolución Cubana, esos y otros factores permanecieron: se mantuvo el antiguo y en muchos sentidos insatisfactorio orden político, a pesar de los decididos intentos por parte de hombres sinceros pero ingenuos de influir sobre los acontecimientos recurriendo a la violencia política. Además, en la medida en que los acontecimientos de Cuba fomentaron la aparición de movimientos insurgentes en otros países (Guatemala, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, República Dominicana), su fracaso pareció reforzar el modelo dominante del pasado.

Por ejemplo, el gobierno de Bolivia, país en el que los golpes de Estado superaban al número de años de independencia, siguió estando durante la mayor parte del tiempo en manos de una élite militar, cuyos miembros, que practicaban una funesta política cuartelera, se fueron sustituyendo unos a otros en una sucesión más o menos dominada por la corrupción. Un caudillo tradicional como el presidente Alfredo Stroessner, de Paraguay, ha logrado sobrevivir sin que su régimen se haya visto demasiado afectado por las

Manifestación del 1 de mayo en Quito, Ecuador, 1976.



nuevas ideas, uniéndose a él nuevos «hombres fuertes» tales como el presidente Pinochet de Chile, que incluso le ha superado en atrocidades. En Argentina y Uruguay los ataques descarados al antiguo orden por parte de una minoría poco representativa empujaron a los militares a intervenir en el proceso político, teóricamente para «restaurar la ley y el orden». Pero, al hacerlo, resucitaron el viejo problema de cómo volver a los cuarteles una vez erradicados los movimientos insurgentes. A comienzos de la década de los ochenta, éste seguía siendo el problema más grave con el que se enfrentaban los gobiernos militares, y es probable que continúe siéndolo mientras no se encuentre una alternativa más adecuada para América Latina que el leninismo o una ineficaz democracia pluripartidista.

El intento de situar la Revolución Cubana en su contexto no significa negarle su originalidad ni su enorme impacto. Tras la victoria de Fidel Castro, Cuba se convirtió rápidamente en el primer estado marxista-leninista de las Américas, estrechamente ligado al bloque soviético. Desde ese momento, Fidel Castro mejoró las perspectivas de la revolución en América Latina ofreciendo a los insurgentes en potencia una base y, más adelante, un refugio. A lo largo de los sesenta proporcionó en ocasiones armas y entrenamiento, pero nunca en dosis suficientes como para asegurar la victoria. Tampoco en 1979 fueron las armas cubanas el factor decisivo para el derrocamiento por los sandinistas del presidente Somoza de Nicaragua.

Concretamente, Fidel Castro internacionalizó la lucha ofreciendo en la radio y en la prensa una nueva dimensión a las pretensiones de los insurgentes. Estos programas estaban redactados en su mayor parte en términos marxista-leninistas, tan anticuados y pomposos pero también tan característicos de su época, como la anterior retórica política liberal de la suya, y ciertamente muy alejados de la realidad. No obstante, eran esenciales para suscitar el interés y el apoyo de la comunidad mundial socialista encabezada por Moscú.

En conjunto, el interés por la Revolución Cubana durante los años sesenta y comienzos de los setenta tuvo probablemente mayores repercusiones sobre la respuesta a los movimientos insurgentes que sobre el propio esfuerzo guerrillero; pues lo que se ha considerado como influencia comunista ha engendrado un gran temor, haciendo que los gobiernos latinoamericanos busquen fuera de sus fronteras remedios que podían haber encontrado más fácilmente en los valores y tradiciones de sus propias sociedades. Tanto los movimientos insurgentes como la respuesta que se les ha dado han limitado gravemente las libertades políticas y provocado grandes sufrimientos personales. Y, lo que

es todavía peor, todas esas campañas no han contribuido en nada a mejorar la suerte del hombre de la calle.

Los movimientos insurgentes de los años sesenta fracasaron sin más; los de comienzos de los años setenta (Argentina, Uruguay) consiguieron algo todavía peor: destruir las libertades democráticas y que éstas se vieran sustituidas por medidas restrictivas y autoritarias. El resultado del tercer movimiento insurgente de finales de los setenta, que se está desarrollando actualmente en América Central, no está claro todavía. Pero en Nicaragua la revolución ha llegado ya al poder y, fuera de sus fronteras, el impacto de la victoria sandinista de 1979 ha inspirado revueltas en El Salvador, Guatemala y Honduras. En 1984 siguen existiendo dudas sobre cuál es la auténtica naturaleza de la Revolución Nicaragüense.

Detrás de la figura de Fidel Castro se encontraba la del dirigente guerrillero Ernesto Che Guevara (1928-67), cuyos diarios y análisis de la guerrilla rural alentaron a muchos revolucionarios a actuar y pensar. No cabe la menor duda de que el pensador más original que ha influido sobre la táctica de la guerrilla rural ha sido Régis Debray (nacido en 1940), un escritor francés marxista que acompañó al Che Guevara a Bolivia, de donde logró salir con vida casi de milagro. Una vez liberado por las autoridades bolivianas, volvió a Francia para convertirse en 1981 en asesor del pre-

Régis Debray, escritor francés y teórico de los movimientos guerrilleros latinoamericanos.



sidente socialista François Mitterrand. Su principal aportación a los movimientos insurgentes consistió en poner de relieve el impacto que podía tener en el proceso revolucionario un pequeño grupo de guerrilleros en el campo, actuando como núcleo revolucionario. Acentuando este aspecto, redujo el papel del partido de masas, tan crucial en el leninismo; este cambio de prioridades condujo a un debate interminable e incluso a escisiones en la escuela política marxista-leninista, cada vez más fraccionada.

Pero el establecimiento de núcleos rurales prometía a los jóvenes acción inmediata; y, en vista del éxito de Fidel Castro, hubo muchos lo suficientemente osados como para arriesgar sus vidas por el ideal de un orden político más justo. Así ocurrió en Paraguay, Argentina y la República Dominicana (1959), en Venezuela y Colombia (1961), en Guatemala y Ecuador (1962), en Perú (1963), en Bolivia (1967) y en Brasil (1968). Con frecuencia el primer intento fallaba, y se ponía en práctica un segundo e incluso un tercero, hasta que la lista de dirigentes guerrilleros muertos era lo suficientemente larga como para convencer a los fieles revolucionarios de que, por sí sólo, el «foco» o núcleo rural no bastaba para provocar un cambio en el orden establecido. Entre los más dignos de ser recordados de todos estos hombres figuran Luis de la Puente (muerto en 1965 en Perú), Camilo Torres (muerto en 1966 en Colombia), Fabricio Ojeda (muerto en 1966 en Venezuela), Che Guevara (muerto en 1967 en Bolivia), Guido Inti Peredo (muerto en 1969 en Bolivia), Carlos Marighela (muerto en 1969 en Brasil) y Marco Antonio Yon Sosa (muerto en 1970 en Guatemala).

Las razones del fracaso de esas aventuras fueron en gran parte la escasa preparación y entrenamiento de quienes participaron en ella y la indiferencia con la que fueron recibidos sus esfuerzos por los campesinos locales. Es también cierto que el entrenamiento contrainsurgente norteamericano contribuyó a mejorar el rendimiento de las fuerzas especiales locales, como ocurrió sobre todo en Bolivia.

Aunque la primera gran oleada de actividad revolucionaria fracasó, persistió la idea de una revolución continental, fortalecida por las ideas de inevitabilidad histórica que, cada vez con mayor ahínco, preconizaban los marxistas-leninistas en La Habana. Coincidiendo con la Guerra del Vietnam, se creyó que en el continente americano se podía crear varios focos insurgentes que terminarían convirtiéndose en toda una serie de Vietnams. Pero el Che Guevara no consiguió coordinar sobre el terreno una estrategia tan ambiciosa. Castro consiguió políticamente algo más de éxito con la creación en 1967 de la Organización para la Solidaridad Latinoamericana (OSLA), que al menos proporcio-

nó a los aspirantes revolucionarios un lugar de encuentro en La Habana, aunque no saliera nada duradero de sus numerosos panfletos y comunicaciones y se oyera hablar más de sus disputas que de sus acuerdos.

Al igual que Che Guevara, los dirigentes de la segunda oleada de movimientos insurgentes mantenían todos la creencia de que la lucha armada era más importante para lograr la revolución que la existencia de un partido de vanguardia. En este sentido eran también herejes con respecto al comunismo. Pero en lugar de luchar desde el campo intentaron hacerlo en las ciudades, lanzando campañas que incluían asesinatos, secuestros, colocación de explosivos y sabotajes, así como la infiltración clandestina en las estructuras fundamentales del Estado.

Las obras que mayor influencia ejercieron fueron un libro no demasiado voluminoso escrito por el activista brasileño Carlos Marighela, *El minimanual del guerrillero urbano*, y los escritos del revolucionario español Abraham Guillén. La nueva guerra librada en las ciudades tuvo efectos muy negativos y destructivos: se libró fundamentalmente en Brasil (1964-70), en Uruguay (1968-72) y en Argentina (1969-76), y provocó la transformación de sociedades tradicionalmente liberales en sociedades cerradas, en las que el dominio militar se impuso sobre todos los aspectos del Estado; no sólo sobre las actividades legislativas, judicia-

Guerrilleros capturados pertenecientes al grupo Sendero Luminoso. Perú.



les y económicas, sino también sobre el trabajo, la educación y la prensa.

En prácticamente toda América Latina los movimientos guerrilleros rurales existentes intentaron crear bases urbanas. En Venezuela y Colombia no se llegó a erradicar nunca del todo la actividad de las guerrillas rurales, aunque durante la década de los setenta no plantearon en ningún momento la amenaza para el Estado que habían logrado crear durante la década anterior.

Los protagonistas de ambas oleadas revolucionarias procedían de idénticos ambientes: eran hombres y mujeres jóvenes, de clase media, en su mayor parte con educación universitaria y que, por convicciones ideológicas, decidieron emprender la tarea de derrocar el orden existente. El nacionalismo no jugó un papel demasiado importante en sus motivaciones, aunque, al intentar identificar el orden dominante con el Imperialismo norteamericano, procuraron fomentar el sentimiento nacionalista.

Pero, en la práctica, levantar a las masas de las ciudades demostró ser tan difícil como lo había sido en el campo, aunque esos nuevos movimientos insurgentes sirvieron al menos para airear los hábitos corruptos de unas democracias manipuladas. Dado que los poderes normales de una democracia demostraron ser incapaces de hacer frente al terrorismo, las fuerzas de seguridad decidieron ocuparse de la cuestión. Se inició una «guerra sucia» caracterizada por las prácticas más terribles. Como respuesta al terrorismo a sangre fría de las fuerzas subversivas, «escuadrones de la muerte» paramilitares eliminaron a todos los individuos que se creía implicados en el ataque contra el Estado.

Para el mundo exterior, la imagen de «Robin Hood» de los Tupamaros uruguayos (MLN) resultó lógicamente atractiva; lo mismo ocurrió con los audaces enfoques que adoptaban en su táctica. Pero debajo de esa imagen juvenil de sinceridad y honradez de clase media se ocultaba la implacable determinación de hacer caso omiso del electorado (en 1971, como parte de la alianza electoral Frente Amplio, los Tupamaros no lograron atraer más de un 20 por ciento de los votos) y destruir el Estado democrático. Los Tupamaros no llegaron a desarrollar nunca un modelo político claro como alternativa, y sería erróneo considerarlos como marxistas-leninistas ortodoxos (aunque, de haber llegado al poder, es muy posible que un comunismo de corte soviético hubiese terminado implantándose en Uruguay, como lo ha hecho en Cuba, y puede hacerlo todavía en Nicaragua).

Pero lo que ocurrió fue que los militares declararon el estado de sitio y desarticulaban la red subversiva de los Tupamaros en 1972, encarcelando a unos 2.800 y dando muerte



Asalto al Palacio de Justicia en Bogotá.

a 62 en tiroteos callejeros. Se capturó a Raúl Sendic, el fundador del movimiento, quien una década más tarde permanecía encarcelado en Montevideo. Cientos de sus seguidores huyeron al extranjero, especialmente a Europa. Fue realmente una tragedia que un número tan reducido de personas pudiera provocar tanto temor como para modificar la trayectoria política de Uruguay, y no sólo momentáneamente a través de una intervención militar, sino durante toda una década o más.

Los Tupamaros habían recibido ayuda de Cuba, pero las razones de su revuelta se encontraban profundamente arraigadas en la economía y la sociedad uruguayas. Lo mismo puede decirse de Argentina, donde durante la primera mitad de los años setenta, el peronismo y el trotskismo contribuyeron a un espectacular crecimiento del terrorismo, a una escala hasta entonces desconocida en la región. Las razones eran complejas, pero tenían que ver fundamentalmente con la lucha por el poder.

El general Perón (derrocado en 1955) había dejado tras de sí una estructura sindical y un considerable número de simpatizantes políticos encuadrados en un movimiento obrero nacional conocido con el nombre de «justicialismo». Desde su exilio en España animó a los miembros más jóvenes del movimiento a adoptar como táctica la violencia políti-

ca, pero esos actos de terrorismo contribuyeron a ahondar el abismo existente entre ellos y los jefes sindicales peronistas, normalmente de edad más avanzada. A medida que sus seguidores fueron dividiéndose en un ala izquierda y en un ala derecha, lo único que pudo hacer Perón para mantener unido al movimiento fue abstenerse de condenar a uno u otro bando. En último extremo (1974) apoyó a la vieja guardia, y los peronistas se enfrentaron unos a otros en una enconada guerra de secuestros, mutilaciones y asesinatos.

De las diversas milicias peronistas, los Montoneros (1970) terminaron convirtiéndose en un movimiento de extrema izquierda que utilizaba tácticas terroristas contra el gobierno. Conducida por Mario Firmenich, la organización consiguió grandes sumas de dinero raptando a altos ejecutivos y directivos del mundo de los negocios y pidiendo rescates por ellos; y entre 1974 y 1978 lanzó una espectacular serie de brutales asesinatos de altos funcionarios del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad. Los Montoneros no llegaron a conseguir nunca una organización capaz de lanzar una campaña guerrillera, pero se preocuparon mucho por heredar el apoyo peronista y apoderarse del poder sobre un programa de izquierda. Cuando los militares argentinos empezaron a participar en las campañas contra-insurgentes y terminaron haciéndose con el gobierno, los Montoneros marcharon al exilio en 1977, y desde Europa y La Habana intentaron convencer a los socialdemócratas de sus dudosas credenciales políticas como una oposición obligada a exiliarse por la brutalidad de los militares.

De hecho, sus antecedentes eran en parte casi fascistas, sus tácticas las propias de los matones y gánsters y sus pretensiones claramente antidemocráticas. No obstante, Fidel Castro acogió favorablemente a Firmenich y a algunos de sus seguidores, y parece ser que en 1979 los Montoneros contribuyeron en cierta medida a la victoria sandinista en Nicaragua con parte del dinero que habían conseguido con sus numerosos secuestros y extorsiones.

Igualmente devastador para la sociedad argentina fue el crecimiento a comienzos de 1970 del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de inspiración trotskista, creado en 1969 como aparato militar clandestino con el objetivo de desencadenar una prolongada guerra contra el gobierno tanto en el campo como en las ciudades. Al igual que los Tupamaros, su líder Roberto Santucho (muerto en 1976) intentó favorecer la imagen de «bandidos generosos» distribuyendo ropas y alimentos expropiados entre los pobres de las ciudades. Los guerrilleros del ERP abatieron implacablemente a disparos a sus enemigos, a los que elegían cuidadosamente entre los miembros más destacados del mundo de los negocios y la jerarquía militar. El ERP se mostró

sobre todo activo en las grandes ciudades, especialmente en Buenos Aires y Córdoba, pero también favoreció la aparición de un movimiento guerrillero rural en la provincia de Tucumán.

Los militares respondieron a esta amenaza de la misma forma que a la de los peronistas, lanzando una campaña interna en contra del ERP. El carácter clandestino de la guerra desencadenada por el ERP condujo a la adopción de tácticas de terror por parte de grupos paramilitares, que asesinaron o hicieron desaparecer a varios miles de personas, sin dejar el menor rastro de su paradero. Reconocer esas irregularidades y responsabilizar a determinados individuos de tales atrocidades se consideró como una tarea imposible por el gobierno de los militares, que cuando tomaron el poder en 1976, habían sido recibidos con auténtico alivio popular, pero que posteriormente habían demostrado ser lamentablemente incapaces de controlar los excesos de sus propios miembros.

Sólo en un país (Nicaragua), y veinte años después de la Revolución Cubana, un movimiento insurgente ha contribuido al derrocamiento de un régimen despótico y a la implantación de lo que al principio se consideró como un gobierno por y para el pueblo. Pero en Nicaragua se produjeron determinadas circunstancias únicas que contribuyeron a la victoria sandinista.

En primer lugar, el presidente Carter terminó negándose a proporcionar a la familia Somoza el apoyo que hasta entonces había recibido incondicionalmente de Estados Unidos. Asimismo la lucha coincidió con una nueva postura por parte de Cuba, la de servir de base a movimientos insurgentes y aumentar no sólo su apoyo sino también sus suministros de armas y entrenamiento. Al mismo tiempo, en las sociedades latinoamericanas se había producido un cambio de incalculables dimensiones gracias a la nueva postura adoptada por la Iglesia Católica con respecto a los gobiernos injustos y la pobreza, postura que se manifestó de manera especial en el desarrollo de lo que ha llegado a conocerse como «Teología de la Liberación». Tres sacerdotes, Ernesto Cardenal, Miguel d'Escoto y Edgar Parrales, desempeñaron un importante papel en el movimiento sandinista y se integraron en el gobierno cuando éste llegó al poder. Dado que los moderados habían renunciado a convencer a Somoza de que reformase un gobierno que durante mucho tiempo había sido poco más que una especie de negocio familiar, los sandinistas consiguieron también el apoyo de los estamentos profesionales y los hombres de negocios.

No obstante, y en último extremo, fueron las fuerzas guerrilleras encabezadas por Edén Pastora las que terminaron



Guerrillero salvadoreño equipado con material estadounidense. Casi un cuarto del armamento proporcionado por EE.UU. al ejército salvadoreño va a parar a manos de la guerrilla.

Es posible que el resurgimiento de las actividades guerrilleras en América Central impulse a las potencias medianas y ricas en petróleo de la región, Venezuela y México, a actuar como influencia moderadora y a ofrecer alternativas contribuyendo a financiar reformas. Evidentemente, la amenaza de revolución en América Central ha exigido de Estados Unidos una reevaluación a fondo de sus prioridades en política exterior y un replanteamiento de las formas y procedimientos por los que ejerce su hegemonía sobre toda la región.

PJ

La Iglesia en América Latina

Desde los primeros tiempos coloniales, los valores y prácticas de la Iglesia Católica Romana han constituido parte integral de la sociedad y la cultura latinoamericanas. En gran medida, la historia religiosa de la región ha sido la historia del catolicismo romano. Los representantes de la Iglesia se introdujeron en América junto con los primeros colonizadores, como aliados y legitimadores de las autoridades coloniales españolas y portuguesas. Estas protejeron eficazmente a la Iglesia contra cualquier tipo de competencia ideológica, mientras que ésta se lanzó a un proceso de conversiones masivas. En consecuencia, la Iglesia y la sociedad colonial se vieron desde el primer momento como entidades esencialmente coincidentes.

Gracias a una concesión especial del Papa, las autoridades imperiales ejercieron controles sin precedentes sobre la Iglesia del «Nuevo Mundo». Las coronas española y portuguesa controlaron el nombramiento de eclesiásticos y acercaron a los clérigos a la administración imperial. De modo similar, la Iglesia ejerció su autoridad espiritual para defender el *status quo*. A cambio, la Iglesia recibió privilegios tales como extensas propiedades y el control sobre la educación. Hubo también algunos pequeños conflictos entre Iglesia y Estado en torno a, por ejemplo, los derechos de los indios, y los jesuitas llegaron incluso a crear comunidades indias que dirigían de manera paternalista y, en gran medida, libre del control secular. No obstante, la imagen general era la de una Iglesia fuertemente ligada al poder secular y defensora del orden social existente, jerárquicamente estructurado. Una teología tomista ortodoxa, que veía a la sociedad en términos necesariamente jerárquicos, impidió el ejercicio de la crítica social; de forma singular, la Iglesia

se concebía en términos clericales, reservando para los laicos un papel pasivo y, en último extremo, subordinado.

Dado los lazos existentes entre la Iglesia y los poderes imperiales, sólo un puñado de clérigos, especialmente en México, participaron activamente en la lucha independentista. Una vez alcanzada la independencia, las nuevas repúblicas intentaron mantener esos controles sobre la Iglesia antes ejercidos por las autoridades imperiales, mientras que los papas se esforzaron por recuperar la autoridad perdida. Divisiones en el seno de las élites gobernantes de los nuevos estados contribuyeron a complicar todavía más la situación. Algunos de sus miembros, normalmente afiliados a partidos liberales e influidos por el racionalismo, el liberalismo o el positivismo contemporáneo, intentaron poner freno a la influencia clerical. La Iglesia respondió aliándose con los intereses tradicionales de las clases superiores, normalmente representados por los partidos conservadores. Por ejemplo, en Chile y Colombia los enfrentamientos entre liberales y conservadores con respecto a la Iglesia constituyeron una importante fuente de divisiones ideológicas.

Los conflictos en torno a las posiciones políticas y sociales de la Iglesia tuvieron diferentes consecuencias. Por un lado tenemos el ejemplo de Colombia, donde en 1887 Iglesia y Estado firmaron un concordato (todavía en vigor) que garantiza a la Iglesia una posición privilegiada y oficialmente reconocida. En el otro extremo está México, que durante la revolución experimentó un período de actividad anticlerical militante destinado a erradicar definitivamente la influencia eclesiástica. Esto dio paso a un *modus vivendi* en gran medida pacífico, pero que siguió dejando a la Iglesia mexicana casi totalmente desprovista de influencia política directa. Yendo todavía más lejos, la Iglesia cubana, que había carecido siempre de derechos sociales profundos, se vio relegada a un papel marginal como consecuencia de la revolución.

Del resto de América Latina, tenemos por ejemplo Chile, donde se procedió a la separación entre Iglesia y Estado (1925), pero la primera mantuvo de hecho una posición preeminente dentro de la sociedad. En toda la región la Iglesia conservó sus rasgos originales, y siguió siendo una institución más o menos uniformemente conservadora que apoyaba por lo general las estructuras sociales que ya estaban establecidas.

El carácter de seguridad que frecuentemente mostraba la posición de la Iglesia tendió a oscurecer el alcance limitado de su impacto sobre la práctica religiosa popular. La política triunfalista de conversiones de masas dejó frecuentemente a la población indígena con una religión sincrética en la que las prácticas o valores católicos coexistían con

creencias y ritos de tiempos precoloniales. El posterior tráfico de esclavos significó también, de hecho, la introducción de prácticas religiosas africanas. El resultado de todo ello fue la existencia de un lazo frecuentemente tenue con las estructuras eclesiásticas oficiales. De modo singular, muchos católicos en apariencia más ortodoxos compartían la idea de una religión «cultural» popular, que aceptaba los símbolos y rituales católicos como parte de la cultura dominante pero con unos bajos niveles de comprensión religiosa o compromiso explícito. Los niveles más altos de compromiso tenderían a estar desproporcionadamente asociados con grupos de clase media y, más específicamente, de clase alta, para los que las prácticas religiosas formales eran sólo parte de una superior forma de vida. El compromiso era por lo general individualista y de carácter pietista. Al igual que la religión popular tendía a favorecer la pasividad frente a las injusticias y desigualdades existentes, las expresiones más ortodoxas de catolicismo continuaron careciendo de un componente socialmente crítico.

Peregrinos en penitencia en la Basílica de Ntra. Sra. de Guadalupe, en México.

